

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y Hugo Alexander Bedoya Díaz, este último por recomposición de la sala ante impedimento aceptado del magistrado John Jairo Acosta Pérez, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001-31-05-018-2015-01349-01, promovido por el señor **JESÚS MARÍA TEJADA MUÑOZ** contra **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**, donde fue vinculada la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES**, en adelante **UGPP**, a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte demandada, contra la sentencia condenatoria emitida el 21 de enero de 2019 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, y el grado jurisdiccional de consulta en favor de dicha entidad.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los

procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **032**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el demandante pretende se condene a la demandada a reanudar el pago de la pensión de invalidez de origen profesional a partir del 1 julio de 2006, en cuantía de un SMLMV, con su reajuste anual, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas.

Para fundamentar sus pretensiones expuso que mediante resolución No. 06399 del 11 de octubre de 1989 le fue reconocida por el ISS la pensión de invalidez de origen profesional, a partir del 10 de enero 1989. El 19 de julio de 2005 solicitó pensión de vejez y le fue reconocida en resolución No. 003587 del 23 de febrero de 2007, a partir del 1 de julio de 2006. A partir de esa fecha fue retirado de nómina de pensionados por la ATEP. El 22 de julio de 2015 solicitó a la demandada la reanudación de su pensión de invalidez de origen de profesional a partir del 1 de julio de 2006, lo cual le fue negado alegando la incompatibilidad entre ambas pensiones.

En auto del 15 de diciembre de 2016 se ordenó la vinculación de la UGPP como parte demandada, pues conforme al artículo 80 de la Ley 1753 de 2015 es la responsable de asumir este tipo de litigios.

Notificada la demandada a la UGPP, dio repuesta alegando la incompatibilidad de la pensión de vejez y la de invalidez. Se opone a las pretensiones y propone las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción.

En sentencia del 21 de enero de 2019, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín declaró que el demandante tiene derecho a que la UGPP le reactive el pago de su pensión de invalidez de origen profesional reconocida en resolución No. 06939 del 11 de octubre de 1989.

Declaró probada la excepción de prescripción frente a la UGPP y la de inexistencia de la obligación frente a Positiva Compañía de Seguros.

Condenó a la UGPP a reconocer y pagar al demandante la suma de \$60.782.596, por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez de origen profesional, causado del 22 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2018. A partir del 1 de enero de 2019 ordenó continuar pagando una mesada pensional equivalente a un SMLMV, incluidas las mesadas adicionales y sin perjuicio de los incrementos legales. Condenó a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 22 de julio de 2012 hasta el pago total de la obligación.

Absolvió a Positiva Compañía de Seguros S.A. de todas las pretensiones, y condenó en costas a la UGPP, fijando agencias en \$6.906.375.

RECURSO DE APELACIÓN

Fue presentado por la apoderada de la UGPP, alegando en síntesis la incompatibilidad entre la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión de vejez. Solicita se revoque la sentencia.

No se tendrán en cuenta los alegatos de conclusión presentados por la UGPP, en tanto los mismos fueron presentados extemporáneamente, pues el auto que corrió traslado para alegar fue notificado el 18 de noviembre de 2022 y los alegatos se presentaron el 28 de noviembre de 2022.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar en primer lugar, la compatibilidad o incompatibilidad entre la pensión de vejez y la pensión de invalidez de origen profesional. En caso de estimarse el problema jurídico principal, se estudiará la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

Frente al recurso promovido, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Se surte igualmente el grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de la UGPP, conforme al artículo 69 del CPT y de la SS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, al artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 169 de 2008, al estar adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente, no administrar recursos propios y depender para su funcionamiento del presupuesto general de la Nación. También, en acatamiento a la sentencia T-513 del 20 de septiembre de 2016, donde se ordenó remitir en consulta las sentencias adversas a dicha entidad.

i) Compatibilidad de la pensión de vejez y la pensión de invalidez de origen profesional

Si bien el artículo 13 literal j) de la Ley 100 de 1993 dispone la incompatibilidad de las pensiones de vejez e invalidez, la hermenéutica de éste mandato fue definida en la línea jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, donde funge como sentencia hito la de radicación **Nº 33558 del 1 de diciembre de 2009**, dando viabilidad a la compatibilidad de estas dos prestaciones económicas, cuando la de invalidez es de origen profesional¹.

¹ Posición reiterada en las sentencias 33.265 de 2010, 34.820 del 22 de febrero de 2011, 34.820 del 13 de febrero de 2013, 40.560 SL 10311 de 2014, SL2096-2015 radicación Nº 57243 del 11 de agosto 2015, SL18072-2016 del 23 de noviembre de 2016, SL17477-2017 del 25 de octubre de 2017, SL1764-2018 del 16 de mayo de 2018, SL1244-2019 del 27 de marzo de 2019, SL3342-2020 del 26 de agosto de 2020 y SL3869-2021 del 25 de agosto de 2021, entre otras.

Las subreglas definidas en tal línea jurisprudencial, prohíjan la compatibilidad de las referidas prestaciones, por cubrir contingencias diversas, con fuentes de financiación autónomas, y cotización separada para cada riesgo.

En la sentencia SL3869 de 2021, se expuso con claridad, nuevamente:

En el caso de las pensiones de invalidez de origen laboral y de vejez es claro que tienen fuentes de financiación independientes, también es diáfano que protegen contingencias bien distintas.

En efecto, la pensión de invalidez de origen laboral cubre el riesgo derivado del trabajo, cuando una persona en razón de las condiciones o el ambiente en el que labora o por circunstancias relacionadas con este, sufre una enfermedad o enfrenta un accidente de trabajo que afecta su desempeño en determinado oficio. Por tanto, es una cobertura propia del trabajo, para cuyo aseguramiento los empleadores, mediante la afiliación y el pago de una prima o cotización, trasladan el riesgo al sistema, a fin de que este otorgue las prestaciones asistenciales y económicas previstas en la legislación.

La pensión de vejez es el reconocimiento que el sistema previsional hace a una persona que prestó su fuerza laboral durante muchos años y que tiene como finalidad garantizar la seguridad económica del trabajador, sustituyendo sus ingresos laborales por una prestación a cargo del sistema. La Corte Constitucional la ha definido como *«un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo, por lo que el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador»* (C-546-1992).

Como se puede observar, se trata de contingencias muy diferentes. Ahora bien, para establecer si determinadas prestaciones protegen o no riesgos distintos, es inapropiado acudir a patrones abstractos y etéreos como el hecho de ser titular de un beneficio o asistencia del sistema de seguridad social o estar amparado previamente frente a una situación de precariedad o inseguridad económica. Si así fuera, serían incompatibles las pensiones de sobrevivientes y la de vejez que logren construir con su trabajo las parejas de los afiliados o pensionados fallecidos.

Así mismo, estas aproximaciones tan genéricas desatienden que el sistema de seguridad social está estructurado por segmentos que brindan coberturas a diferentes necesidades y ciclos en la vida del ser humano (p.e. en el trabajo o como persona en inactividad laboral, en el bienestar, la salud, la familia), y pasan por alto que las pensiones son un derecho social construido con el esfuerzo y el trabajo de las personas para protegerse a sí mismas y a sus familias, de manera que no pueden concebirse como dádivas, asistencias o auxilios del Estado.

Tampoco es plausible acudir a criterios como la pérdida o disminución de la capacidad laboral, para afirmar que tanto la vejez como la invalidez implican un deterioro de las capacidades productivas y, por tanto, las

pensiones otorgadas recaen sobre el mismo riesgo. Tal abordaje cae en el prejuicio según el cual los afiliados en edad pensional perdieron su capacidad laboral o son inválidos, lo cual reproduce prácticas discriminatorias hacia las personas mayores y banaliza los importantes aportes que hacen al mundo laboral y al crecimiento económico con base en su experiencia, madurez y conocimiento acumulado por largos años de vida.

Por tanto, es desafortunado el argumento de la entidad de seguridad social recurrente, cuando afirma que tanto la pensión de vejez como la de invalidez cubren el mismo riesgo: la imposibilidad de trabajar.

Los argumentos para negar el reconocimiento de la reactivación de la pensión de invalidez de origen profesional, consistentes en la incompatibilidad de pensiones de invalidez y vejez, son contrarios a las sub reglas jurisprudenciales de la H. CSJ que rigen esta situación particular y concreta, pues desde la sentencia hito N° 33.558 del **1 de diciembre de 2009**, se permitió la **compatibilidad de las pensiones de vejez e invalidez de origen profesional**, momento para el cual, mutó el alcance hermenéutico del artículo 13 literal j) de la Ley 100 de 1993 en atención a las reglas de interpretación definidas por dicha corporación.

Nótese como para el **22 de julio de 2015**², fecha de la reclamación de reactivación de la pensión de invalidez ante Positiva Compañía de Seguros S.A., ya estaba consolidada la línea jurisprudencial de la H. CSJ sobre la compatibilidad de las pensiones de invalidez de origen profesional y vejez, definida en las sentencias citadas, constituyendo precedente.

Tal posición se acata en su integridad por ésta Sala de decisión, por cuanto es el último precedente en la materia que constituye doctrina probable, según el mandato de la sentencia C-836 de 2001.

En consecuencia, le asiste derecho al demandante a la reactivación de su pensión de invalidez de origen profesional, el cual se configura por el análisis de la línea jurisprudencial aplicable. Debiéndose **confirmar** la sentencia en este punto.

² Pág 17 archivo 3 del expediente digital

La *a quo* liquidó el retroactivo de la pensión de invalidez de origen profesional en cuantía de un SMLMV, a partir del **22 de julio de 2012**, lo cual se encuentra ajustado a derecho dado que se configuró la prescripción, pues el retiro de nómina se produjo para julio de 2006³ y la reclamación administrativa para la reactivación de la pensión de invalidez de origen profesional fue presentada el **22 de julio de 2015**⁴, configurándose la excepción de prescripción conforme a los artículos 151 del CPT y de la SS y 488 del CST, al haber transcurrido más de 3 años entre una y otra fecha. Por lo cual también se **confirmará** la sentencia en este aspecto.

ii) Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

La *a quo* concedió dicho concepto a partir del 22 de julio de 2012 hasta el pago total de la obligación. Sin embargo, se **revocará** la decisión, en tanto la pensión de invalidez de origen profesional reconocida al demandante mediante resolución 06399 del 11 de octubre de 1989, no hace parte del Sistema General de Pensiones que implementó la Ley 100 de 1993, ni el Decreto 1295 de 1994, en tanto aquella tuvo como fundamento normativo las disposiciones del Decreto 3170 de 1964, tal y como lo definió la Sala Laboral de la H. CSJ en sentencia SL3153-2014, radicación N° 41547 del 12 de marzo de 2014 al indicar:

“En instancia resultan igualmente aplicables las consideraciones vertidas en sede de casación, lo que implicará la confirmación de la decisión de primera instancia en este punto, que igualmente se extenderá a la absolución dispuesta por el *a quo* respecto de los intereses moratorios, por tratarse de una prestación que como fue la pensión de invalidez de origen profesional que se le concedió al demandante, no hace parte del Sistema General de Pensiones que implementó la Ley 100 de 1993, en tanto aquella tuvo como fundamento normativo las disposiciones del Decreto 3170 de 1964”.

Posición reiterada en las sentencias SL3286-2021 Radicación n.º 88796 del 28 de julio de 2021, donde de insistió en la improcedencia de la condena a intereses moratorios sobre mesadas causadas, “pues la prestación no se causa en vigencia de la Ley 100 de 1993, ni es de las que allí se tratan”. Y en la SL3250-2022 Radicación n.º 70702 del 31 de agosto de 2022, donde negó tal concepto “toda vez que la prestación reconocida tiene origen en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el

³ Pág 9 archivo 3 del expediente digital

⁴ Pág 11 archivo 3 del expediente digital

Decreto 3041 de la misma vigencia, y aquellos fueron consagrados en la Ley 100 de 1993”.

Al revocarse los intereses moratorios procede la **indexación** solicitada como pretensión subsidiaria, pues tal corrección monetaria pretende impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario, en procura de que la obligación se satisfaga de manera completa e integral. Tal actualización debe materializarse, en este caso sobre las mesadas causadas a partir **22 de julio de 2012**, hasta el momento de hacerse efectivo el pago de las obligaciones reconocidas en la sentencia.

Costas en estancia instancia a cargo de la UGPP, por resultar vencida con la formulación del recurso de apelación. Se fija como agencias en derecho la suma **\$1.160.000**, a favor de la parte demandante, conforme al Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto 5 de 2016, vigente al momento de presentación de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación y grado jurisdiccional de consulta, en cuanto a la condena a intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para en su lugar absolver a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES de dicho concepto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES a la indexación de las mesadas pensionales causadas a partir **22 de julio de 2012**, hasta

el momento de hacerse efectivo el pago de las obligaciones reconocidas en la sentencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: Costas en estancia instancia a cargo de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, por resultar vencida con la formulación del recurso de apelación. Se fija como agencias en derecho la suma **\$1.160.000**, a favor de la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**. Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

Hugo Alexander Bedoya Díaz

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Hugo Alexander Bedoya Diaz
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **130229aab74de12c41b8a4f96d8313db20e4f1f52e72370a43cff13013913df4**

Documento generado en 16/02/2023 03:27:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>